

ECONOMÍA Y TRABAJO

des eléctricas a interconexiones, campos de energías renovables, o terminales de regasificación. Es un dispositivo paralelo, pero distinto de la fabricación.

P. Partimos casi de cero.

R. Europa apenas produce el 2% del total mundial de placas solares. Una mayoría abrumadora se hace en China. El presidente de una de las sociedades que está en ello acaba de confesarme que en caso de no poder contar con apoyos está a punto de replantear y buscar otra localización para las inversiones que tenía previstas en nuestro continente. Tenemos que evitar ese éxodo. El primer ministro polaco me comentaba el otro día con acierto: "Los europeos debemos exportar nuestros productos, no nuestros empleos" en estos sectores de futuro. Por mi parte, añado que para esas nuevas producciones se necesitan materias primas muy selectas, tierras raras, minerales específicos. Gran parte de esos materiales se extraen o se elaboran en China.

P. También en Ucrania.

R. Sí, pero la elaboración, las refinerías del litio, por ejemplo, están en China, al 90%. Chile produce, pero tiene que enviarlo por barco allá, y luego nosotros lo importamos. Dependemos del lugar que elabora. Tenemos que montar factorías en Europa y trabajar acuerdos de importación con los productores, como Chile, o Namibia o Canadá, que diversifiquen el acceso a la materia prima. Y también abrir minas de extracción propias. No debemos reposar completamente en los demás porque tenemos recelos a la posible contaminación: hoy hay suficientes tecnologías para su producción limpia, manteniendo el respeto al medio ambiente y a la biodiversidad. Moralmente, no debemos cerrar los ojos de forma que solo extraigan los demás.

P. El subsector europeo es menos rico.

R. Tenemos muchos minerales en Europa. Litio, cobalto, zinc. A grandes trazos, podríamos satisfacer al menos el 30% de nuestras necesidades. Y ahora hay que añadirle el descubrimiento de Suecia.

P. La presidenta Von der Leyen ha propuesto un fondo de soberanía para las inversiones industriales más globales, ¿cómo se conjuga eso con este paquete?

R. Es una propuesta a más largo plazo. Versará sobre sectores que deban ser protegidos. Y requerirá claramente una financiación de la Comisión.

P. En cuanto a la nueva legislación digital de la UE ¿le obedecerá Elon Musk en su exigencia de que modere los contenidos de Twitter y la desinformación?

R. No tiene por qué obedecerme o no. Soy muy claro. Europa es el primer mercado digital del mundo libre: una vez y media que los americanos desde el punto de vista de usuarios. Es normal que las grandes plataformas quieran venir. No las forzamos a venir, son bienvenidas, pero les decimos: he aquí nuestras reglas. En Europa continental se conduce a la derecha. Vale para la conducción o para enviarnos automóviles. Es todo. Entienden bien cuáles son las condiciones de acceso a nuestro mercado, hay que cumplirlas y si no se dispondrá de una escala de sanciones. No es la obediencia personal. Es la ley.



Recolección de fresas el 3 de diciembre en una finca de Palos de la Frontera (Huelva). / PACO PUENTES

División sindical ante el nuevo convenio agrícola en Huelva

Los jornaleros se sienten desprotegidos en el inicio de la campaña

EVA SAIZ, Sevilla
Los convenios colectivos que regulan el sector agrícola de Huelva siempre son polémicos. El último, de 2018 y que decayó en 2021, solo fue suscrito por la patronal, representada exclusivamente por Asaja, y CC OO, sin UGT. El preacuerdo para los próximos tres años ha sido rechazado de nuevo por esta organización sindical porque, considera, es "un retroceso en los derechos" de los jornaleros. CC OO, el sindicato con la representación mayoritaria, lo defiende como "positivo e innovador" y destaca que es "realista". Mientras se ultiman los detalles del nuevo convenio que registró sobre unas 70.000 personas, los trabajadores denuncian desamparo.

"Nos sentimos desprotegidos"

mos y engañados por los sindicatos", afirma Raquel Álvarez, de 43 años, nacida en Madrid, pero afincada en Aljaraque (Huelva). Lleva seis campañas recogiendo fresas y frutos rojos bajo los invernaderos. "Los empresarios sostienen que esto solo ocurre en algunas fincas, pero la realidad es que si un día no vas a trabajar, no cobras; si a las tres horas te mandan a casa porque llueve, tampoco cobras el resto. Y esos derechos no vemos que nos los garanticen los sindicatos", abunda. Una opinión que secunda D. B. —quien pide aparecer solo por sus iniciales—, jornalero de Escacena (Huelva), que tiene 37 y empezó con 16. "Nunca he visto un delegado sindical en el tajo. Nuestra situación en el campo es difícil, por no decir in-

digna", sostiene. El texto del preacuerdo no ha trascendido, pero tanto CC OO como UGT abordan con este diario los puntos más polémicos. "No es un mal convenio. Es un convenio realista que garantiza que podamos exigir a los empresarios su cumplimiento", indica Mónica Vega, responsable del sector agrícola de CC OO en Andalucía. Destaca que se reconoce la figura del trabajador fijo discontinuo, que "pese a entrar en vigor el año pasado con la reforma laboral, en Huelva, no se aplicaba por no estar reconocida en el convenio". Desde UGT, Luciano Gómez, responsable de la Federación de Industria, Construcción y Agro de la organización en Huelva, niega la mayor: "El convenio se ha cumplido y no puede alegarse eso para recono-

cer todo lo que piden los empresarios".

Fuentes de CC OO también destacan que las tablas salariales garantizan el cumplimiento del salario mínimo y su aplicación de manera retroactiva a 2021. UGT, advierte, sin embargo, de que ese sueldo base es ficticio porque se parte de tablas del año anterior, donde no se tenían en cuenta los nuevos aumentos. Gómez recuerda que el TSJA falló a favor de que esas tablas se actualizaran según el incremento del salario mínimo, fijando esa cantidad para los trabajadores eventuales que prestan servicios para un empleador menos de 120 días al año en 48,55 euros al día.

Los puntos que mayor oposición suscitan en UGT son la reducción de 30 a 15 minutos del tiempo de descanso; o el cambio en el plus salarial que cobraban los jornaleros a partir de los dos kilómetros de distancia entre el lugar de trabajo y el de pernoctación. La reducción del incremento de la cuantía de la primera hora extraordinaria trabajada del 75% al 25% —lo que supone cuatro euros diarios menos— también es otro punto de diseño.

"Recoger en un convenio lo que ya está reconocido por la ley no se puede considerar una mejora de nuestras condiciones", señala Ana Pinto, fundadora del sindicato Jornaleras en Lucha, que hace dos años consiguió arrancar el compromiso de CC OO y UGT de crear una plataforma para poder trasladar las reivindicaciones de los trabajadores de la fresa y que, finalmente no fructificó. Su organización canaliza la mayoría de las escasas denuncias de los temporeros.

"No nos movemos para poner en su sitio al empresario porque muchos se ven obligados a agachar la cabeza porque necesitan trabajo", reconoce D. B. "Aquí nos conocemos todos y si te quejas te amenazan con no trabajar", abunda Álvarez. Asaja y CC OO se han emplazado a una última reunión entre el 16 y el 20 de enero, a la que también está invitada UGT, para firmar el nuevo convenio.

OPINIÓN / ANDREU MISSÉ

Vivienda: errores que matan

La falta de viviendas sociales es una de las carencias más graves de este país. La OCDE indica que en España las viviendas sociales representan entre el 2% y el 3% del total. Estamos a años luz de Holanda, donde estas viviendas representan el 34% del total, o el Reino Unido y Francia, que significan un 15%.

Resulta insoportable constatar que han sido políticas erróneas las que han conducido a esta situación. La insensata venta de las viviendas de protección social, la mínima inversión pública durante años, una legislación desalmada y la ausencia de la participación de las empresas privadas en proporcionar vivienda social. Se ha corregido la legislación, pero a pesar de su prohibición, siguen los desahucios. Algunos costaron vidas.

Los años de la euforia de la privatización han sido catastróficos. En España se han vendido más de siete millones de Viviendas de Protección Oficial (VPO), ha recordado Ja-

vier Burón, gerente de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. La historia de Barcelona es elocuente. La economista Carme Trilla, una de mejores conocedoras de esta realidad social, ofrece cifras inquietantes. Durante el siglo XX en Barcelona se construyeron 606.2019 viviendas, de las cuales un 41% eran de protección oficial. El parque actual es de 785.757 viviendas y si se hubieran mantenido las protegidas, hoy representarían el 38% del total, muy por encima de la media europea. En el caso de Madrid, la liquidación de viviendas sociales por los Gobiernos del Partido Popular ha sido sangrante. Las ventas de la Comunidad (2.953 viviendas) y del Ayuntamiento (1.860) a fondos especulativos han sido traumáticas para miles de familias.

El abandono de la inversión pública ha agravado el problema. Durante el último mandato del PP, (2012 -2018), la inversión del Estado en vivienda cayó hasta los 820 o 481 millones de euros anuales. El Gobierno

de coalición ha multiplicado esta cuantía hasta los 3.295 y 3.472 millones para 2022 y 2023, respectivamente. A pesar de ello, es muy insuficiente. En España: *misión vivienda*, La contribución de Barcelona a la convergencia con las buenas prácticas europeas, Javier Burón sostiene que "en España hacen falta al menos 11.000 millones de euros al año durante no menos de un par de décadas". Ha destacado que Barcelona está doblando su parque público hasta 15.000 viviendas, un ejemplo que deberían seguir las demás administraciones. Ello ha sido posible gracias al derecho de tanteo y retracto de la administración para las viviendas desahuciadas, establecido en Cataluña en 2015. Una medida seguida con éxito en Baleares y en la Comunidad Valenciana.

Un tercer error a corregir es la necesidad de implicar a la empresa privada entre los límites del sector público. Trilla propone la "concertación". La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, recordó el sábado en Barcelona en el acto de Sumar, que la "vivienda es un derecho fundamental" y apeló a los fondos de inversión a "que pongan pisos sociales, porque estamos seguros de que si negociamos con estos señores lo van a entender". Visiones realistas para desafíos enormes.